

## **Resumen de “Breve historia contemporánea de la Argentina” (Romero)**

### **Capítulo 7 – “El proceso, 1976-1983”**

El 24 de marzo de 1976, la Junta de Comandantes en Jefe, integrada por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti, se hizo cargo del poder, dictó los instrumentos legales del llamado “Proceso de Reorganización Nacional” y designó presidente de la Nación al general Videla. En 1981 será reemplazado por el general Roberto Viola, quien renuncia a fines de ese mismo año. Su sucesor, Leopoldo Galtieri, renunció a mediados de 1982, luego de la derrota en la guerra de Malvinas. El general Reynaldo Bignone convocó a elecciones en octubre de 1983 y entregó el mando al presidente electo, Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre de ese año.

---

El caos económico de 1975, la crisis de autoridad, las luchas facciosas y la muerte presente cotidianamente, la acción espectacular de las organizaciones guerrilleras y el terror sembrado por la Triple A, crearon las condiciones para la aceptación de un golpe de Estado que prometía restablecer el orden y asegurar el monopolio estatal de la violencia. La propuesta de los militares consistía en eliminar de raíz el problema, que en su diagnóstico se encontraba en la sociedad, que se hallaba “enferma”, plagada de “tumores” que debían “extirparse”.

El plan fue una operación integral de represión, planeada por las tres armas, ensayada primero en Tucumán (en 1975) y luego ejecutado de modo sistemático en todo el país. Los mandos militares concentraron en sus manos toda la acción y los grupos parapoliciales que habían operado en los años anteriores se disolvieron o subordinaron a ellos.

La planificación general y la supervisión táctica estuvieron en manos de los más altos niveles de conducción castrense. Las órdenes bajaban, por la cadena de mandos, hasta los encargados de la ejecución, los Grupos de Tareas. La ejecución requirió además un complejo aparato administrativo, que daba cuenta del movimiento –entradas, traslados y salidas- de un conjunto muy numeroso de personas.

Se trató de una acción terrorista clandestina, dividida en cuatro momentos principales: secuestro, tortura, detención y ejecución.

Para los secuestros, se operaba preferentemente de noche, en los domicilios de las víctimas, si bien muchas detenciones fueron realizadas en fábricas, lugares de trabajo o bien en la calle. Al secuestro seguía el saqueo de la vivienda, perfeccionado posteriormente cuando se obligó a las víctimas a ceder la propiedad de los inmuebles.

El destino primero del secuestrado era la tortura, sistemática y prolongada. La “picana”, el “submarino” y las violaciones sexuales eran las formas más comunes. La tortura servía para lograr la denuncia de compañeros, lugares y operaciones; pero más en general tenía el propósito de quebrar la resistencia del detenido, anular sus defensas, destruir su dignidad y su personalidad. Muchos morían en la tortura; los sobrevivientes iniciaban una detención más o menos prolongada en alguno de los trescientos cuarenta centros clandestinos de detención (“chupaderos”). Se encontraban en unidades militares (Escuela de Mecánica de la Armada, Campo de Mayo, etc.), pero generalmente en dependencias policiales (El Olimpo, el Vesubio, la Cacha, la Perla, etc.).

En estos lugares, los detenidos se encontraban mal alimentados, sin atención médica y siempre encapuchados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones; muchas veces los mismos secuestradores se apropiaban de sus hijos o los entregaban a conocidos.

Para la mayoría de los detenidos el destino final era el “traslado”, es decir, su ejecución. Esta decisión se tomaba en el más alto nivel de mando, después de un análisis de los antecedentes, potencial utilidad o “recuperabilidad” de los detenidos.

Todas las operaciones fueron clandestinas. A veces los cadáveres aparecían en la calle, como muertos en enfrentamientos. En ocasiones se dinamitaron pilas enteras de cuerpos. Pero en la mayoría de los casos los cadáveres se ocultaban, enterrados en cementerios como personas desconocidas, quemados en fosas colectivas o arrojados al mar con bloques de cemento, luego de ser dormidos con una inyección. De ese modo no hubo muertos, sino “desaparecidos”.

Las desapariciones se produjeron masivamente entre 1976 y 1978, y luego se redujeron a una expresión mínima. Se documentaron alrededor de nueve mil casos, mientras que las organizaciones defensoras de los derechos humanos reclamaron por 30 mil desaparecidos.

Se trató en su mayoría de jóvenes de entre 15 y 35 años. Algunos pertenecían a las organizaciones armadas: el ERP fue diezmado entre 1975 y 1976 y, a la muerte de Roberto Santucho, en julio de ese año, poco quedó de la organización. Montoneros, que también sufrió muchas bajas, siguió operando aunque limitado a acciones terroristas.

Cuando la amenaza de estas organizaciones había prácticamente desaparecido, la represión continuó su marcha: cayeron militantes de organizaciones políticas y sociales, dirigentes gremiales de base, sacerdotes, intelectuales, abogados, activistas de los derechos humanos. Algunos tenían relación indirecta con las organizaciones armadas; otros cayeron por ser parientes de alguien o figurar en una agenda.

La operación procuraba eliminar todo activismo, toda protesta social, toda expresión de pensamiento crítico. Las víctimas no fueron sólo los muertos, sino también los vivos: se trataba de imponer la cultura del miedo, de dominar y controlar al conjunto de la sociedad.

El Estado se desdobló: una parte, clandestina y terrorista, practicó una represión sin responsables, eximida de responder a los reclamos; la otra, pública, apoyada en un orden

jurídico que ella misma estableció, silenciaba cualquier otra voz.

No sólo desaparecieron las instituciones de la república, sino que fue clausurada la expresión pública de opiniones: los partidos y la actividad política quedaron prohibidos, así como los sindicatos y la actividad gremial; se sometió a los medios de prensa a una explícita censura que impedía cualquier mención del terrorismo estatal y artistas e intelectuales fueron vigilados.

---

Cuando Videla asume la presidencia en 1976, había una situación de crisis económica cíclica (desequilibrio en la balanza de pagos, inflación, recesión). El encargado del ministerio de Economía será Alfredo Martínez de Hoz.

Luego de intervenir la CGT y los principales sindicatos, suprimir las negociaciones colectivas y prohibir las huelgas, se congelaron los salarios, que en 1976 cayeron cerca del 40 %. Con la ayuda complementaria de los créditos externos, la crisis cíclica se superó sin desocupación.

Desde mediados de 1977 comenzaron a plantearse las grandes reformas, que modificaron las normas básicas vigentes desde 1930. La reforma financiera eliminó la regulación estatal de la tasa de interés y se permitió la proliferación de bancos e instituciones financieras. El Estado no dispuso ya de créditos subsidiados para asignar según sus prioridades.

En un clima altamente especulativo, la competencia entre las instituciones financieras mantuvo elevada la tasa de interés y con ella inflación, que el equipo económico no pudo reducir. El Estado garantizaba no sólo los títulos que emitía, sino los depósitos a plazo fijo, tomados a tasa libre por entidades privadas, de modo que, ante una eventual quiebra, se devolvía el depósito a los ahorristas. Esta combinación de liberalización, eliminación de controles y garantía estatal llevará finalmente a todo el sistema a la ruina.

La segunda gran modificación se produjo en diciembre de 1978, con la llamada "pauta cambiaria". El objetivo era fortalecer la previsibilidad cambiar y así reducir la inflación. Para ello el gobierno fijó una tabla de devaluación mensual del peso, gradualmente decreciente. Pero la inflación subsistió, y el peso se revaluó respecto al dólar. Su efecto se sumó al de la progresiva apertura económica y la progresiva reducción de aranceles. La consecuencia del dólar barato y los bajos impuestos fue una inundación de productos importados a precio ínfimo, que afectó con dureza a la industria local.

La adopción de la pauta cambiaria coincidió con una gran afluencia de dinero del exterior. El flujo de dólares –origen del fuerte endeudamiento externo- fue común en América Latina, pero en la Argentina lo estimuló la posibilidad de tomarlos y colocarlos sin riesgo en el mercado financiero local, aprovechando las elevadas tasas de interés internas y la garantía estatal sobre el precio de recompra de dólares. Huno mucho dinero en circulación, se obtuvieron abultados beneficios nominales –la "plata dulce"- y muchos pudieron comprar costosos productos importados o viajar al exterior. Pero la pauta

cambiaría no redujo ni las tasas de interés ni la inflación, a medida que la sobrevaluación del peso anticipaba una futura e inevitable gran devaluación.

El eje de esta política económica tenía como cara visible al sector financiero. Muchas empresas compensaron sus fuertes quebrantos operativos con ganancias en la actividad financiera; muchos bancos se convirtieron en el centro de una red de empresas, endeudadas con ellos y compradas a bajo precio. El Estado financió su déficit operativo y sus obras públicas con endeudamiento externo. Muchas empresas tomaron créditos en dólares y los colocaron en el circuito financiero, y para devolverlos recurrieron a nuevos créditos.

Para 1980, muchas empresas tuvieron problemas, aumentaron las quiebras y los acreedores financieros, con infinidad de créditos incobrables, buscaron salir del aprieto ofreciendo tasas más altas para captar más depósitos.

En marzo de este año, el Banco Central decidió la quiebra del banco privado más grande y de otros tres importantes, que a su vez eran cabezas de grupos empresarios. Para frenar la corrida bancaria, el gobierno asumió sus pasivos, que representaban la quinta parte del sistema financiero.

El problema financiero siguió agravándose, y hasta el fin del gobierno militar la crisis fue una constante.

Para 1981, ya con Viola como presidente, dejará de utilizarse la “tablita” (pauta cambiaria) y se abandonará la paridad cambiaria sostenida. A lo largo de este año, el peso fue devaluado en un 400 %, mientras que la inflación llegaba a un 100 % anual. La devaluación fue catastrófica para las empresas endeudadas en dólares. El Estado, que ya había absorbido las deudas del sistema bancario, concurrió en un auxilio en 1982 y se hizo cargo de la deuda externa de las empresas, aumentando su propio endeudamiento.

La estrategia centrada en el fortalecimiento del sector financiero, en la apertura y el endeudamiento no benefició a ninguno de los grandes sectores de la economía, sino a actores individuales privilegiados. La industria sufrió la competencia de los artículos importados, el encarecimiento del crédito, la supresión de muchos mecanismos de promoción y la reducción del poder adquisitivo de la población. El producto industrial cayó en los primeros cinco años alrededor del 20 % y también la mano de obra ocupada (muchas plantas cerraron). Los sectores más antiguos e ineficientes, como el textil y el de confecciones, fueron barridos por la competencia, pero también resultaron muy golpeados aquellos nuevos, como el metalmecánico o el electrónico, que habían progresado notablemente. En cambio crecieron y se beneficiaron las grandes empresas de celulosa, siderurgia, aluminio, petroquímica, petróleo o cemento, y las automotrices; para ellas se mantuvieron los antiguos beneficios y promociones del Estado.

En cuanto al sector agropecuario, sus ingresos dejaron de volcarse al sector industrial para volcarse al sector financiero. Este sector entró en una crisis prolongada desde 1981.

Si bien el sector industrial perdió mucha mano de obra, la desocupación no aumentó en grandes proporciones. Muchos trabajadores de la industria se volcaron a los servicios y a

su vez hubo una gran expansión en la construcción y en obras públicas. El gobierno se embarcó en una serie de grandes proyectos como las obras del Mundial de Fútbol, autopistas, caminos, represas hidroeléctrica o centrales nucleares, aprovechando los créditos externos baratos.

Por su parte, las empresas del Estado adoptaron como estrategia privatizar parte de sus actividades, contratando con terceros el suministro de equipos –como con los teléfonos- o la realización de tareas, como hizo YPF con la extracción de crudo.

Cuando la burbuja financiera se derrumbó, quedó en evidencia que la principal consecuencia de la traumática transformación había sido- junto con la deuda externa- una fuerte concentración económica. En este caso, el principal papel no específicamente correspondió a las empresas extranjeras. Los principales beneficiarios fueron algunos grandes grupos locales empresariales, junto con algunas transnacionales, directamente ligados a un empresario o a una familia empresarial como Macri, Pérez Companc, Bulgheroni, Fortabat, etc. o transnacionales con fuerte base local, como Bunge y Born o Techint. Así, el *establishment* económico adquirió una nueva fisonomía.

En un contexto de estancamiento, estos grupos crecieron a costa de un Estado que había pasado de la promoción general de algunos sectores de la economía a la prebenda individualizada, en beneficio de grupos que frecuentemente colonizaban sus oficinas. Los grupos acumularon una fuerza tal que en el futuro resultaría muy difícil revertir las condiciones en que actuaban y, junto con los acreedores extranjeros, se convirtieron en los nuevos tutores del Estado.

El Estado se fue convirtiendo, pues, en “subsidiario”, al perder instrumentos fundamentales que se utilizaban desde 1930, como la regulación del crédito y de la tasa de interés, la política arancelaria y el control de cambios.

Si bien las empresas estatales sobrevivieron como tales, se fueron degradando en la medida en que los mejores cuadros fueron alejados, las bajas tarifas crearon un desastre financiero y en que se dio el fenómeno de la “privatización periférica”, permitiendo crecer a las empresas competidoras. Así, se endeudaron y deterioraron las empresas de servicios.

Así pues, se achicó el Estado sin conseguir siquiera una mayor eficiencia, ya que el gasto público creció en forma sostenida, alimentado primero con la emisión y luego con el endeudamiento externo- Una parte importante tuvo como beneficiario directo a las Fuerzas Armadas, que se reequiparon con vistas al conflicto con Chile primero y luego con Gran Bretaña, y otra también considerable se destinó a los grandes programas de obras públicas. Los espacios para las negociaciones espurias se multiplicaron debido a que las tres Fuerzas Armadas se repartieron la administración del Estado y la ejecución de obras públicas, multiplicando las demandas de recursos.

El “Proceso de Reorganización Nacional” supuso la coexistencia de un Estado terrorista clandestino, encargado de la represión, y otro visible, sujeto a normas establecidas por las propias autoridades “revolucionarias”. En la práctica, el Estado ilegal fue corroyendo y

corrompiendo al conjunto de las instituciones del Estado y su misma organización jurídica. El Estatuto del Proceso y las actas institucionales complementarias crearon la Junta Militar, con atribuciones para designar al presidente y controlar una parte importante de sus actos, pero las atribuciones respectivas de una y otro no quedaron totalmente deslindadas, y fueron el resultado del cambiante equilibrio de fuerzas. También se creó la Comisión de Asesoramiento Legislativo para discutir leyes; estaba integrada por tres representantes de cada arma. Dicha comisión se convirtió en una instancia más de los acuerdos y las confrontaciones internas.

Cada uno de los cargos ejecutivos, desde gobernadores a intendentes, así como el manejo de las empresas del Estado y demás dependencias, fue objeto del reparto entre las fuerzas y quienes los ocupaban dependían de una doble cadena de mandos: del Estado y de su Arma, de modo que el conjunto pudo asimilarse a la anarquía feudal, antes que a un Estado cohesionado en torno del poder.

Contaminado por el Estado terrorista clandestino, todo el edificio jurídico de la república resultó así afectado, al punto que prácticamente no hubo límites normativos para el ejercicio del poder, que funcionó como potestad omnímoda del gobernante. La corrupción se extendió a la administración pública, de la que fueron apartados los mejores elementos: los criterios de arbitrariedad fueron asumidos por los funcionarios inferiores, convertidos en pequeños autócratas sin control y, a la vez, sin capacidad para controlar. La fragmentación del poder y la anarquía derivaban de la escrupulosa división del poder entre las tres fuerzas, pero también surgía de la existencia de definidas facciones en el propio Ejército, donde con la represión surgieron verdaderos señores de la guerra, que casi no reconocían autoridad sobre sí.

En torno a los generales Videla y Viola- su segundo en el Ejército- se constituyó la facción más fuerte, pero que distaba de ser dominante. Estos respaldaban a Martínez de Hoz, pero reconocían la necesidad de encontrar en el futuro alguna salida política.

Otro grupo afirmaba que la dictadura debía continuar indefinidamente y que la represión debía llevarse hasta sus últimas consecuencias. Sus figuras más destacadas eran los generales Luciano Benjamín Menéndez y Carlos Suarez Mason, a los que se asociaba el general Ramón J. Camps, jefe de la provincia de Buenos Aires y figura clave de la represión.

El tercer grupo lo constituyó la Marina de Guerra, dirigida por su comandante Emilio Massera, quien se propuso encontrar una salida política que lo llevara a él mismo al poder. Massera desarrolló un juego propio; jaqueó a Videla, para acotar su poder, y tomó distancia de Martínez de Hoz.

El grupo de Videla y Viola fue avanzando gradualmente en el control del poder, pero en mayo de 1978 Massera logró que se separaran las funciones de presidente de la Nación y de comandante en jefe del Ejército, pese a que Videla fue confirmado como presidente hasta 1981 y Viola lo sucedió como jefe del Ejército. El desplazamiento de Menéndez fue un triunfo importante para Videla, aunque poco después Viola pasó a retiro y fue reemplazado al frente del Ejército por el general Leopoldo Fortunato Galtieri. En 1980,

Videla pudo imponer en la Junta de Comandantes la designación de Viola como su sucesor, pero a costa de una compleja negociación, que auguró el prolongado saqueo al que sería sometido el segundo presidente del Proceso.

En suma, la política del orden empezó fracasando con las propias Fuerzas Armadas, pues la corporación militar se comportó de manera indisciplinada y facciosa, y poco hizo para mantener el orden que ella misma pretendía imponer a la sociedad.

Hacia 1981, estimulados por el descontento que generó la crisis económica, empezaron a escucharse voces de protesta.

El empresariado apoyó el Proceso desde el comienzo, pero a la distancia. Pese a las coincidencias generales, hubo desconfianzas recíprocas: los militares atribuían a los empresarios responsabilidad respecto al caos social, y estos estaban divididos en sus intereses.

La Unión Industrial y la Sociedad Rural recién empezaron a presionar en conjunto cuando el régimen militar dio signos de debilidad y disposición hacia la apertura.

El movimiento sindical había recibido duros golpes, ya por el intervención de la CGT y los sindicatos, por la prohibición del derecho a huelga, o por las “listas negras” para mantener alejados a los activistas. En abril de 1979, cuando la represión había menguado un poco, los combativos realizaron un paro general de protesta, que los dialoguistas no acataron y que concluyó con la prisión de la mayoría de los dirigentes. En 1980, los combativos reconstruyeron la CGT. En 1981, la CGT realizó una huelga general, con consecuencias generales a la de 1979. Las huelgas parciales se hicieron más frecuentes e intensas. El 30 de marzo de 1982 la CGT convocó a una movilización a Plaza de Mayo, que el gobierno reprimió con violencia.

También la Iglesia modificó su comportamiento cuando el régimen militar empezó a dar muestras de debilidad. En principio el gobierno estableció una relación muy estrecha con la jerarquía eclesiástica. Ésta aceptó los asesinatos de varios religiosos, calló cualquier crítica, justificó la “erradicación de la subversión atea” y toleró que algunos de sus miembros tuvieran una participación activa en ella. Pero progresivamente, influida por la nueva orientación del Papa Juan Pablo II, se propuso renunciar a la injerencia directa en las cuestiones sociales y políticas. En 1981, el documento “Iglesia y comunidad nacional” afirmó los principios republicanos, indicó la opción de la Iglesia por la democracia y su apartamiento del régimen militar.

Sin embargo, la voz más notable la de un grupo de madres de desaparecidos que empezó a reunirse todas las semanas en Plaza de Mayo, marchando con la cabeza cubierta por un pañuelo blanco, reclamando por la aparición de sus hijos. Las “Madres de Plaza de Mayo” se convirtieron en la referencia por la defensa de los derechos humanos.

La prohibición política terminó en 1981. Los dispersos grupos de derecha fueron convocados para constituir una fuerza política oficialista, mientras peronistas y radicales entablaban conversaciones con otros partidos. Los partidos se comprometían a no colaborar con el gobierno en una salida electoral condicionada ni a aceptar una

democracia sometida a la tutela militar. Poco a poco, fueron elevando su tono, se reclamaron los únicos depositarios de la legitimidad política e incorporaron las protestas de empresarios, sindicalistas o los reclamos respecto a los derechos humanos. Junto con las otras voces- sindicalistas, empresarios, estudiantes, religiosos, intelectuales, y defensores de derechos humanos- constituyeron un coro difícil de ignorar.

Desde 1980, los dirigentes del Proceso discutían la cuestión de la salida política. Les preocupaba la crisis económica, el aislamiento, la adversa opinión internacional –por los reclamos sobre derechos humanos, que el gobierno tildó de “campaña antiargentina”- y también los enfrentamientos internos de las propias Fuerzas Armadas. Las disidencias se manifestaron públicamente con la designación de Viola- a la que se opuso la Marina-, sobre todo cuando, tras asumir (en 1981) el presidente trató de modificar el rumbo de la política económica.

Viola trató de aliviar la situación de los empresarios locales, golpeados por la crisis financiera y la devaluación de la moneda, incorporándolos al gabinete. Tomó contacto con distintos políticos para tratar de organizar una eventual transición.

A fines de 1981, una enfermedad de Viola dio la ocasión para su desplazamiento y reemplazo por el general Leopoldo Galtieri, quien retuvo su cargo de Comandante en jefe del Ejército, modificando así la precaria institucionalidad que los mismos jefes militares habían establecido.

Galtieri se manifestó dispuesto a alinear al país con Estado Unidos y a apoyarlo en la guerra encubierta que libraba en América Central. Galtieri pretendía conducir a la Argentina hacia el mundo de las grandes potencias, protegido por su poderoso aliado. Su ministro de Economía, Roberto Alemann se rodeó del equipo de Martínez de Hoz y volvió al rumbo inicial. La recesión se agudizó y con ella las protestas de sindicatos y empresarios; anunció un plan de privatizaciones que suscitó oposición incluso en sectores del gobierno. Galtieri chocó con resistencias cada vez más fuertes y hasta con movilizaciones callejeras, como la lanzada por la CGT el 30 de marzo de 1982.

En este contexto se concibió y lanzó el plan de ocupar las islas Malvinas. Desde la perspectiva de los militares, “recuperar las islas” permitiría unificar a las Fuerzas Armadas tras un objetivo común y ganar, de un golpe, la cuestionada legitimidad ante una sociedad visiblemente disconforme. Además, permitiría encontrar una salida al atolladero que había creado la cuestión con Chile por el canal del Beagle.

En 1971, los presidentes Alejandro Lanusse y Salvador Allende habían acordado someter a arbitraje la cuestión de la posesión de tres islotes que dominan el paso por aquel canal, que une los océanos Atlántico y Pacífico. En 1977, el laudo arbitral los otorgó a Chile y el gobierno argentino lo rechazó. En 1978, cuando ambos países parecían dispuestos a dirimir la cuestión por las armas, decidieron aceptar la mediación del Papa.

La agresión a Chile, bloqueada por la mediación papal, fue desplazada hacia Gran Bretaña, el tradicional imperio, que se suponía viejo y achacosos. La idea era sencilla: luego de la ocupación, que presentaba pocas dificultades, se contaba con el apoyo estadounidense y

se confiaba con que Gran Bretaña finalmente admitiría la ocupación. En ninguna de las hipótesis entraba la posibilidad de una guerra.

El 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas desembarcaron y ocuparon las Malvinas, luego de vencer a la débil resistencia de las escasas tropas británicas. El hecho suscitó un amplio apoyo: la gente se reunió espontáneamente en Plaza de Mayo y volvió a hacerlo una semana después en ocasión del secretario de Estado estadounidense. Ese día, Galtieri le habló a la multitud desde el “histórico balcón” de Perón. Todas las instituciones de la sociedad manifestaron su adhesión sin reserva, y los dirigentes políticos viajaron a las Islas junto con los jefes militares.

Por su parte, la primera ministra británica, Margaret Thatcher, se propuso sacar réditos políticos de una victoria militar. De inmediato se alistó una fuerza naval de importancia; el 17 de abril la Fuerza de Tareas iniciaba su marcha hacia las Malvinas.

Gran Bretaña obtuvo rápidamente la solidaridad de la Comunidad Europea y el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que declaró a la Argentina nación agresora y exigió el retiro de las tropas. Este poderoso bloque apenas era contrapesado por el latinoamericano –con excepción de Chile, que colaboró con los británicos-, de poco peso militar.

Mientras tanto, Estados Unidos trababa de encontrar una salida negociada del conflicto. Poco a poco, el gobierno argentino fue víctima de un aislamiento diplomático creciente, agravado por los reclamos sobre violaciones de los derechos humanos, pues se argumentaba que una victoria argentina significaría convalidar su desempeño anterior. Argentina intentó presionar a Estados Unidos a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde los miembros mantuvieron su respaldo, pero de una manera muy general, que no implicó compromiso militar.

Cuando comenzaba el ataque británico, Estados Unidos abandonó la mediación; el Senado votó sanciones económicas a la Argentina y ofreció apoyo a Gran Bretaña. Argentina buscó aliados imposibles, como la Unión Soviética y hasta Cuba, que hundían la ilusión de acercarse al Primer Mundo.

En los últimos días de Abril, la Fuerza de Tareas británica recuperó las Islas Georgias. El 1ro de mayo comenzaron los ataques aéreos a las Islas Malvinas, y al día siguiente un submarino británico hundió el crucero argentino General Belgrano, ubicado lejos de la línea de batalla, con lo que la flota argentina optó por alejarse definitivamente del frente de guerra. Siguió luego un importante combate aero-naval: la aviación argentina causó importantes daños a la flota británica, pero no logró impedir que las islas quedaran aisladas del territorio continental. En ellas, los jefes militares habían ubicado cerca de diez mil soldados, en su mayoría jóvenes, escasos de abastecimientos, sin equipos ni medios de movilidad y sin planes.

En la Argentina, la manipulación total de los medios de comunicación permitía creer que se estaba ganando la guerra.

De a poco empezaron a surgir voces críticas: en los actos de la CGT por el 1ro de Mayo volvieron las voces agrias; dentro del radicalismo, Raúl Alfonsín –que dirigía el sector

opositor- propuso la constitución de un gobierno civil de transición, que encabezaría el expresidente Illia. De a poco, el tema del país luego de la guerra se instaló en la opinión pública.

El 24 de mayo, los ingleses desembarcaron y establecieron una cabecera de puente en San Carlos. . El 29 se libró un combate importante en el Prado del Ganso, donde cientos de argentinos se rindieron. Finalmente, el 14 de junio los británicos tomaron Puerto Argentino (anteriormente llamado Puerto Stanley). El conflicto dejó más de 700 muertos y casi 1300 heridos.

Como resultado, los generales exigieron la renuncia a Galtieri y, en medio de un conflicto entre las tres fuerzas, fue designado presidente el general Reynaldo Bignone, quien logró un consenso mínimo de las fuerzas políticas para un programa de institucionalización, sin plazos precisos.

El gobierno se proponía negociar la salida electoral y asegurar que su retirada no sería un desbande. Se intentó lograr el acuerdo de los partidos para una serie de cuestiones: la política económica, la presencia institucional de las Fuerzas Armadas en el nuevo gobierno y, sobre todo, una garantía de que no se investigarían ni los actos de corrupción ni las responsabilidades en lo que empezaban a llamar la “guerra sucia”. La propuesta fue rechazada por la opinión pública y por los partidos políticos, que convocaron poco después a una marcha civil en defensa de la democracia. La asistencia fue masiva y el gobierno fijó la fecha de elecciones para fines de 1983. Pero no dejó de intentar cerrar el debate: un documento sobre los desaparecidos declaró que no había sobrevivientes y que todos habían caído combatiendo; una ley estableció una autoamnistía, eximiéndolos de cualquier eventual acusación.

Los militares debían enfrentarse con la evidencia de su fracaso como administradores de un país desquiciado y como conductores de una guerra absurda.

Por su parte, la sociedad “despertaba” y encontraban nueva resonancia voces hasta entonces poco escuchadas, como la de los militantes por los derechos humanos y, en especial, las de las Madres de Plaza de Mayo.

Por otro lado, la crisis económica generó motivos movilizadores: impuestos, indexación, suba de alquileres, deudas impagas dejada por una quiebra bancaria; quienes reclababan cuestionaban tanto la política económica como la clausura de lo público. En otros casos fue un fragmento de la sociedad (un barrio, un pueblo) el que se organizó para reclamar, como en los “vecinazos” del Gran Buenos Aires, a fines de 1982, así como para buscar soluciones al margen del Estado: cooperativas, asociaciones de fomento o ligas de amas de casa. El nuevo activismo social se manifestó en los campos más diversos:

peregrinaciones a Luján o recitales de rock, que a su manera representaban actos políticos. El activismo también renació en las universidades y en las fábricas.

La sociedad experimentaba una nueva primavera: el enemigo común estimulaba la solidaridad y alentaba una organización y una acción de la que se esperaban resultados concretos.

Parte de este nuevo espíritu vino de la movilización sindical: los sindicalistas sacaron a la gente a la calle para reclamar contra la crisis económica y en favor de la democracia. A lo largo de 1982 y 1983 hubo una serie de paros generales y huelgas parciales.

La afiliación a los partidos políticos- luego de que el gobierno levantó definitivamente la veda- fue tan masiva que uno de cada tres electores pertenecía a alguno de ellos. Esto transformó a los partidos políticos: hubo un amplio deseo de participación y se animaron los comités o las unidades básicas. También se renovaron los cuadros dirigentes y se incorporaron quienes venían de militar en organizaciones juveniles.

El peronismo se transformó a su vez, postergando la cuestión del verticalismo y combinando la organización territorial con la sindical. Para las elecciones de 1983 llevó como candidato a presidente a Ítalo Luder.

El radicalismo se renovó por impulso de Raúl Alfonsín, quien había disputado el liderazgo con Ricardo Balbín. Durante el Proceso, se distinguió del resto de los políticos, pues criticó a los militares con mucha energía, asumió la defensa de los detenidos políticos y el reclamo por los desaparecidos y evitó involucrarse en la euforia de la guerra de Malvinas. Hizo de la democracia su bandera y la combinó con un conjunto de propuestas de modernización de la sociedad y el Estado, una reivindicación de los aspectos éticos de la política y un discurso ganador, que atrajeron al partido a una masa de afiliados y simpatizantes.

Las formas de hacer política del pasado reciente dejaban paso a otras en las que se afirmaba el pluralismo, el respeto de las formas institucionales y una subordinación de la práctica política a la ética. Para cuidar el instrumento democrático, se puso sobre todo el acento en el consenso alrededor de las reglas y en la acción conjunta para la defensa del sistema. Sin embargo, se postergó la discusión de programas y opciones, que necesariamente implican conflictos, ganadores y perdedores; lo cual generaría problemas a la hora de culminar la transición, un poco más adelante.

El peronismo encaró las elecciones con mucho del viejo estilo y pagó los costos.

Alfonsín recurrió en cambio a la Constitución. Agregó una apelación a la transformación de la sociedad que definía como moderna, laica, justa y colaborativa. Estigmatizó al régimen militar, aseguró que se haría justicia con los responsables y denunció un espurio pacto de impunidad entre los militares y sindicalistas. Aseguró que la democracia no sólo podía resolver los problemas de largo plazo, sino también satisfacer la masa de demandas acumuladas.

La mayoría le creyó y el radicalismo, con más de la mitad de los votos, ganó las elecciones superando ampliamente al peronismo.